

El último capítulo del libro se titula «sacerdozio ministeriale e legge del celibato» (pp. 295-327). Dentro del conjunto de los estudios recogidos en el volumen, son las páginas de mayor densidad teológica. El autor analiza aquí algunas corrientes doctrinales que tienden a «desacralizar» la figura del sacerdote católico y, partiendo del magisterio reciente (en especial, la encíclica de Pablo VI *Sacerdotalis caelibatus*), profundiza en las múltiples razones teológicas que fundamentan la ley canónica del celibato sacerdotal. Tiene particular interés la valoración crítica de las objeciones más difundidas contra la ley del celibato (echo de menos, sin embargo, una valoración expresa de uno de los planteamientos más difundidos en esta materia: la reivindicación del celibato «opcional». En cualquier caso, las respuestas del autor a dicho planteamiento ya resultan implícitas en sus afirmaciones). En las consideraciones finales, el autor subraya que el celibato es ante todo «un problema di comprensione» (p. 322) que reclama un esfuerzo personal para captar los «magna misteria quae in eo significantur atque adimplentur» (PO, 16).

Hasta aquí la descripción del contenido de estos escritos sobre la nueva legislación eclesiástica. Quisiera destacar finalmente el equilibrio y profundidad de las opiniones del autor. Mons. Herranz es fiel a las exigencias del método canónico, y demuestra también una fina sensibilidad hacia las grandes cuestiones eclesiológicas y pastorales implicadas en la legislación de la Iglesia latina. Aunque pueda parecer superfluo merecen también subrayarse las abundantes citas de los textos magisteriales y legislativos para fundamentar las afirmaciones. Esta exigencia elemental del método canónico no siempre es tenida en cuenta por los autores que prefieren referirse a la bibliografía complementaria, antes que cotejar sus opiniones con lo dispuesto en los textos autorizados.

En este sentido, pienso que las variadas cuestiones tratadas en estas páginas están unidas por un hilo conductor o actitud fundamental: la convicción optimista y esperanzada de que la nueva legislación canónica puede contribuir, con las luces y sombras propias de toda obra humana, al desarrollo de la operatividad salvífica de la Iglesia.

ANTONIO VIANA

MANUALES

Alberto BERNARDEZ CANTON, *Parte General del Derecho Canónico*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1990, 206 págs.

1. Precedido el *Índice* por la oportuna Licencia eclesiástica, el prestigioso catedrático de Derecho Canónico Alberto Bernárdez nos ofrece esta parte General del Derecho Canónico, en la que se suman la admirable claridad de su estilo y una síntesis muy contenida del mucho saber científico que su autor posee.

La obra carece de dificultades. Todo en ella se expone con orden sistemática, y crecientemente se va abarcando el mundo canónico que Bernárdez desea transmitir. Quizá este modo de exponer sea el resultado quintaesenciado de tantos años de trabajo, de esfuerzo por ofrecer diáfananamente la ciencia del Derecho Canónico a sus alumnos, primero en la Universidad de Barcelona, después en la de Sevilla. Pero nada de esto nos dice el Autor. En su Introducción -a partir de la p. 19 para terminar en la 62- no nos da a conocer sus objetivos al publicar su obra, ni sus propósitos, si se trata de una primera entrega de una obra completa sobre el Derecho Canónico o si de una publicación más dentro de su ya abundante y valiosa bibliografía.

La *Introducción*, que comienza con el Capítulo I, Concepto del Derecho Canónico, nos sitúa ya, sin más, en el espacio que ocupa el Derecho Canónico en un Derecho de mayor generalidad, el Derecho de las Confesiones religiosas. De inmediato, va mostrando quiénes son aquellos canonistas de los que se siente tributario o simplemente colegas, en cuyas opiniones se apoyará tantas veces, sea para mostrar la propia, sea para compartirlas. Siempre, profundamente respetuoso con aquel de quien disiente; obsequioso de quien se estima deudor o al menos implícitamente señala como maestro. En este aspecto, se ha de destacar la referencia siempre precisa, y en cierto modo devota, de Maldonado. Después, aparecerán otros nombres, Del Giudice, Pedro Lombardía, Hervada, Piñero Carrión, Viladrich, De la Hera y otros compañeros de la labor universitaria. No abusa de las citas a lo largo del trabajo, pero esas referencias a pie de página son significativas de las posturas que el A. adopta en relación con los temas fundamentales en que hoy se debate el Derecho Canónico. Luego, al final de la obra, se contiene una relación de *Bibliografía General*, dividida en obras anteriores y posteriores al Código de 1983, puramente ilustrativa.

El A. muestra el Derecho Canónico dividido en ramas, Constitucional, Administrativo, etc. Prefiere hablar en este Capítulo de normas canónicas, a las que clasifica según diversos criterios. En su última parte, una vez que nos ha permitido adentrarnos en el propio sistema normativo canónico, nos enseña (pp. 28-34) lo que lo distingue de la Teología, de la Moral, de la doctrina social de la Iglesia, del Derecho Público Eclesiástico y del Derecho Eclesiástico del Estado. Y aquí me permito una licencia, que es la de preguntar dudando: ¿no es ya el Derecho Público Eclesiástico realmente Derecho Canónico?

A continuación, en el Capítulo II (pp. 35-48) aborda un tema tan discutido hoy como el de la naturaleza jurídica de este Derecho. Plantear este problema, el de la juridicidad de lo que se viene designando desde hace tantos siglos bajo el nombre de Derecho no deja de ser una paradoja. El A. clasifica en tres grupos las posturas doctrinales opuestas a esa juridicidad, para concluir a favor de su naturaleza jurídica, por reunir el Derecho Canónico las características de intersubjetividad, alteridad, imperatividad, coactividad y justicia o proporcionalidad. A continuación se ocupa del Derecho Canónico entendido como ordenamiento institucional, al contemplarlo bajo una visión integral por la que se «pretende recapitular en un todo unitario los elementos jurídicos que se dan cita en una conformación social» (p. 46). En consecuencia, siguiendo la terminología de Santi Romano, le aplica la categoría de ordenamiento jurídico primario, que es-

tima corresponderse con otra categoría, actualmente un tanto abandonada, pero que el A. se muestra dispuesto a conservar, la de sociedad jurídicamente perfecta (cfr. pp. 47-48).

Aún bajo esa rúbrica de *Introducción*, el Capítulo III se destina al análisis de las peculiaridades del Derecho Canónico (pp. 49-62), con su distinción Derecho divino y Derecho humano, si bien sosteniendo siempre el carácter unitario del ordenamiento canónico, y acepta la fórmula concebida por Hervada acerca de la positivación y formalización del Derecho divino (cfr. pp. 52-53). Analizando esas características peculiares del Derecho canónico, le presta una especial atención a la elasticidad y especialmente se detiene en lo que califica como instrumentos flexibilizadores del Derecho canónico, cuyas más importantes manifestaciones son las figuras propias del *ius singulare*, derivadas «de actos de autoridad dictados *intuitu personae*» (cfr. pp. 56-58). Aunque confiesa ser un tema de Derecho Constitucional, trata a continuación de los caracteres principales de la constitución de la Iglesia, y termina el Capítulo describiendo la figura jurídica de la Iglesia, para lo que se sirve de un concepto precedente que pertenece a *Del Giudice*, si bien prefiera el A. sustituir los términos «corporación institucional» por el de «comunidad institucional», más apta, a su juicio, «para designar una entidad social de base predominantemente personalista» (p. 61).

2. Los tres Capítulos que siguen quedan amparados por una rúbrica común: «Formación histórica del Derecho Canónico». El primero de ellos, y IV de la obra (pp. 65-76), tiene por objeto el estudio del Derecho canónico clásico. Para él la fuente de conocimiento por excelencia es la misma norma en cuanto dada a conocer y promulgada *coram populo*; por esto, las fuentes de conocimiento, a su entender, «conducen indefectiblemente al contacto con la norma, sobre todo cuando no son sino instrumentos de recopilación y divulgación» (p. 65). El Capítulo V (pp. 77-81) lo dedica al estudio del Derecho tridentino, del que hace notar la significación que todo este período tiene en la historia del Derecho Canónico, pues permaneció hasta principios del siglo XX; es el tiempo de la consolidación del *Corpus iuris canonici* y que se caracteriza también por la aparición de numerosos cultivadores del Derecho Canónico. Por último, a la codificación dedica el Capítulo VI (pp. 83-97), en el que concurren también un apartado destinado al Proyecto de Ley fundamental, indefinidamente aplazado, y al otro Código Oriental, todavía en trance de elaboración al ver la luz pública la obra reseñada.

3. Por fin, aparecen los capítulos acogidos bajo la común rúbrica *Parte General*, que da su nombre al conjunto de la publicación. Pero cabría preguntarse si no es parte general todo lo que hasta ahora se ha descrito. ¿Qué se entiende por Parte general? Si se reduce a lo que el Código de 1983 comprende en su Libro I, dedicado a las normas generales, el A. tiene una concepción de lo general más amplia por una parte, y más restrictiva por otra, que la que el nuevo Código posee. Parece, sin embargo, que tiene una concepción más amplia que la del Código porque, aunque prescindamos de lo que del Libro I excluye, abarca en esta Parte general toda la dimensión de la Iglesia que se designa como Pueblo de Dios. Pero a continuación nos preguntamos: ¿cómo excluir entonces lo que se refiere a la constitución jerárquica de la Iglesia? Prescindir de esta dimensión en una parte general, por muy brevemente que se exponga, nos oculta, a mi parecer, la completa figura jurídica de la Iglesia. Podrá decirse que ello se habrá de

estudiar en una rama aparte, en Organización eclesiástica, y ciertamente es así, pero cuando la parte general se expone en una obra aislada, no formando parte de un conjunto, pienso que esa dimensión necesaria de la constitución de la Iglesia debió ser estudiada. El A. ha preferido seguir otro criterio, pero no por ello se deja de sugerir que en una futura edición de este mismo libro, éste quedaría muy beneficiado si uno de sus Capítulos versara sobre la constitución jerárquica de la Iglesia. Entonces, a mi parecer -y con todos los respetos a una opinión distinta-, la figura de la Iglesia aparecería en todas sus dimensiones, en una Parte general, que se presentaría al lector como paleta con toda la gama de colores. Pero sigamos la reseña de la obra que analizamos.

4. A la legislación canónica se dedica todo el Capítulo VII (pp. 101-112). Parte de la noción de Ley eclesiástica (cfr. pp. 101-102) y sigue con la exposición de los órganos legislativos, para abordar, en este mismo apartado, el concepto de potestad, concepto unitario, si bien se diversifique, esa *plenitudo potestatis*, en funciones distintas ejercidas por órganos especializados, si bien vinculados y dependientes del Romano Pontífice o del Obispo, en los que reside, en su respectivo nivel, la plenitud de la potestad de jurisdicción. No faltan las necesarias referencias al Colegio Episcopal. Junto a ellos, son estudiados los órganos consultivos; tanto los que colaboran junto al legislador universal, como los colaboradores del Obispo diocesano. Especial atención presta el A. a los legisladores intermedios, Concilios provinciales, Concilios Plenarios, Conferencias Episcopales. En adelante (pp. 108-112) centra su atención en los actos propios del ejercicio de la potestad legislativa, a cuyo efecto señala las peculiaridades de los actos legislativos en contraste con otros actos normativos como son los Decretos Generales, los Decretos ejecutivos, las Instrucciones, los Estatutos y Reglamentos. La variedad de formas, según el A., se explica «no estar supeditada la potestad del Pontífice a ninguna formalidad externa», con lo que incluso «pueden tener fuerza de ley los llamados *oracula vocis*» (p. 108).

El más extenso de los Capítulos es el VIII, destinado al estudio de lo que se designa bajo la rúbrica «Régimen jurídico de la Legislación eclesiástica» (pp. 113-133). Analiza la vigencia temporal, la personal y la territorial de las leyes. El énfasis lo pone el A. en la persona humana, no sólo en cuanto la ley lleva consigo obligatoriedad, sino en cuanto atribuye derechos. Es la persona la protagonista y destinataria del ordenamiento jurídico (cfr. p. 118). Trata de la aplicación de la ley, de su interpretación, de lo que califica como «integración del Derecho», entendiendo este tipo de actividad como un «proceso intelectual conducente a localizar el principio jurídico o regla aplicable a un caso desasistido de precepto legal». Prefiere esta terminología a la de lagunas del Derecho, como también muestra su disconformidad con la expresión «Derecho supletorio», pues se trata simplemente de la integración del Derecho mediante la *analogia legis* y los principios generales del Derecho aplicados con equidad canónica; principios que han de adquirirse de la doctrina del Magisterio eclesiástico y de la continuidad histórica del Derecho Canónico, mientras la equidad es considerada «justicia del caso concreto», identificada frecuentemente «con la aplicación benigna de la ley», es decir la privación a ésta de su rigor en circunstancias especiales, con lo que la equidad canónica añade a la ley «el espíritu de las virtudes cristianas, en especial la caridad, la prudencia,

la benignidad, etc.» (cfr. pp. 127-129). Distinguirá, a continuación, la jurisprudencia y la práctica de la Curia Romana, para terminar sentando que la fuerza vinculante de la doctrina de los doctores «dependerá del acierto con que manejen las fuentes y los medios de integración» (cfr. pp. 129-130). Por último, el Capítulo se cierra con «La costumbre» (pp. 130-133). Aquí cabría preguntarse si este lugar era el que le correspondía en la sistemática de la obra, al menos que se piense que lo ha hecho así el A. para darle un tratamiento unitario, pues el último de sus apartados -«El Código y las costumbres anteriores»- sí nos parece un tema propio del presente capítulo. No dejamos de pensar, y por sinceridad lo hacemos constar, que, aunque temamos equivocarnos, para el A. la costumbre canónica cumple un papel más bien residual entre las fuentes del derecho, pues, como afirma, «difícilmente se puede imaginar que en la actualidad (...) la costumbre desempeñe una función propiamente creadora del Derecho» (p. 130).

A «Los Actos Administrativos» dedica el Capítulo IX (pp. 135-147). Señala la «innovación del Código vigente» al convertirlos en una *categoría unitaria* (cfr. p. 135). Para el A. este tratamiento «representa la clara incorporación al Derecho Canónico de la teoría secular del acto administrativo», si bien estima que se resiente «de precipitación y de un insuficiente grado de asimilación» (cfr. p. 136). Bernárdez, ante la cuestión planteada acerca de la naturaleza jurídica del *ius singulare*, sostiene que «el carácter innovador no es exclusivo de la norma puesto que también se produce, dentro de su ámbito, en el caso de la resolución judicial, de la decisión de una autoridad gubernativa e incluso en la creación de un acto jurídico entre particulares». Estima a su vez que nada impide que quien tiene potestad legislativa tenga «también encomendada una función ejecutiva», y por otro lado resulta que si la flexibilización de la norma exige que se establezca, por ese mismo órgano, una disposición distinta, nos hallamos «en presencia de una hipótesis de reserva a favor del legislador de aquellos actos administrativos que supongan exención o excepción de la norma» (cfr. p. 137). Considera «escaso» el régimen jurídico unitario que le dedica el Código al acto administrativo y pasa seguidamente a la exposición del régimen concreto del Decreto singular, los rescriptos, el privilegio y la dispensa (cfr. pp. 138-147).

Quizá notamos en este capítulo una omisión, la de no hacerse eco de los trabajos de E. Labandeira en este campo, y especialmente nos referimos a su «Tratado de Derecho administrativo canónico». Esto es perfectamente compatible con que nos parezcan convincentes las posturas del A. y la sistemática expositiva del Capítulo, a lo que añadimos que nos parece acierto indudable, por ejemplo, el concepto que ofrece del privilegio: «acto por el que la autoridad competente otorga una situación jurídica particularizada en favor de una persona determinada o de un grupo de personas determinadas, situación no prevista por el derecho común o a veces contraria a lo establecido en éste» (p. 143).

5. Dos Capítulos, el X y el XI, tienen como tema la persona física. El primero de ellos (pp. 149-162) parte de la consideración de la persona, en esa estimativa, central para el Autor, a la que nos hemos referido ya, que, en cuanto sujeto del derecho, es el «valor primordial del Derecho»; es la persona la «destinataria de las normas, la portadora de las relaciones jurídicas (...) y por ser el componente fundamental del

ordenamiento que debe estar al servicio del hombre». El ordenamiento canónico es «eminentemente personalista (...) al servicio del hombre y de la humanidad» (cfr. p. 149). Junto a ello, el concepto de personalidad, tal como la describe el c. 96, que es «principio de Derecho constitucional y, en lo sustancial, de Derecho divino» (p. 150). Si por el bautismo se adquiere la personalidad, la muerte la extingue. Dice que «la figura del fiel como tal no existe si no es encarnada en alguno de los estados jurídicos» (p. 153), pero a mi juicio pudo decirse lo mismo, y pienso que más acertadamente, afirmando que la figura del fiel, como tal, existe siempre encarnada en cualquiera de los estados jurídicos en que se hable del bautizado. Al considerar la condición fundamental del fiel, afronta el tema de la tutela de sus derechos (cfr. pp. 155-158), sin embargo, cabría decir que el A. no muestra una gran confianza a un sistema técnico completo de garantías judiciales. Podrían estimarse que a este respecto son expresivas las palabras siguientes: «Sin desconocer la importancia que tiene ese control jurisdiccional y la eficacia que puede representar en la protección de los derechos subjetivos en relación con la administración, tampoco puede pretenderse que sea una garantía imprescindible en la persecución de aquel cometido ya que en cualquier sistema jurídico pueden producirse errores y quebrantos de la justicia incluso contando con la indudable buena fe por parte de los juzgadores» (p. 157). Para el A. en Derecho Canónico se tiene siempre como una garantía posible, cual es el recurso al Romano Pontífice. Por cierto, que al tratarse de estos temas, notamos de nuevo la ausencia de la obra aquí ya citada de Labandeira.

Las situaciones que influyen en la condición jurídica de la persona son expuestas en el Capítulo XI (pp. 163-178). Distingue circunstancias determinantes de la capacidad (por lo que abandona el término que se viene utilizando de «modificativas»), en las que incluye edad, sede local, parentesco y rito, frente a «Otras circunstancias determinantes», como son sexo, enfermedad y las sanciones penales con especial referencia a la excomunión. A continuación estudia los estados jurídico-canónicos, un término el de estado que por cierto hoy no es compartido pacíficamente por todos los canonistas. El A. sostiene que «cada miembro de la Iglesia queda adscrito a alguno de esos estados», y en definitiva vuelve a proclamar una doctrina sobre la que ya hicimos alguna aclaración, cual es la de que «la condición de mero cristiano o de fiel no se da en la práctica» (cfr. p. 169). Mas entrando en su propia dialéctica cabría decir, análogamente, que prácticamente tampoco se da la condición de persona humana, puesto que a ella la contemplaremos siempre ligada a la ciudadanía, a su pertenencia a un pueblo determinado, a un estado social concreto, a una titularidad de derechos determinados por su condición jurídica civil concreta. Para el A. «los estados jurídico-canónicos afectan al sujeto a título social, es decir, por su pertenencia a un grupo o cuerpo social jurídicamente estructurado y que define la posición jurídica de sus miembros dentro de la sociedad eclesial» (p. 174). Quizá hubiera sido más correcto decir, en nuestra opinión: la pertenencia a ese grupo o cuerpo social y jurídico, en cuanto este define a su vez una posición jurídica de los miembros dentro de la sociedad eclesial. Por ello, también discrepamos en cierta medida cuando en nota a la p. 174 quiere encontrar la diferenciación teológica de los estados entre los fieles según «la forma de asumir el compromiso cristiano». Cosa distinta sería, en cambio, decir las distintas formas de asumir el compromiso cristiano

cabe que, en determinados supuestos, dé origen a una diferenciación teológica de los estados jurídicos en que pueden los fieles encontrarse.

6. El tema de la persona no deja de tener su proyección en la persona jurídica. A su estudio dedica el Capítulo XII (pp. 179-192), en el que se comienza por tratar el concepto de persona jurídica, su fundamentación y clasificaciones legales. Clasificar a las personas jurídicas atendiendo a su composición personal o real «queda -a juicio del A.- anticuada y anulada en unos esquemas jurídicos hoy superados. Acaso la figura de personas jurídicas mixtas resolviera en parte esta dificultad». Se refiere, en estas consideraciones, a las estructuras sociales, como las de la diócesis o la parroquia, en que alcanza una mayor importancia su «elemento orgánico u organizador con sus correspondientes órganos o centros de dirección (oficios eclesiásticos) junto con el elemento personal y el elemento patrimonial o real» (cfr. p. 182).

En la presentación conjunta de las personas jurídicas, tras la clásica distinción de las de derecho divino frente a las de derecho humano, contraponen aquellas personas jurídicas constituidas en órganos jerárquicos colegiados, entre los que incluye las Conferencias Episcopales, los Cabildos Catedrales y el Colegio Cardenalicio, de las que designa bajo la común rúbrica de «Agrupaciones de fieles». Y dentro de estas últimas distingue a su vez aquellas que surgen por una razón territorial, a las que llama «circunscripciones territoriales», de las que existen por un acto expreso de voluntad del fiel, a las que designa como «organizaciones voluntarias» y en las que incluye los institutos de vida consagrada y las asociaciones públicas y privadas, añadiendo además a ellas las Prelaturas personales, cuya personalidad jurídica, afirma el A., que al no quedar perfiladas en el Código «dependerá de lo previsto en cada caso en el decreto de erección» (cfr. pp. 186-188). Todo intento de esquematizar en sistemas cerrados, dependientes de un solo elemento, como es el territorio en un caso y la voluntad del fiel en el otro, resulta ser un intento clasificatorio arriesgado. Por ejemplo, en las «circunscripciones territoriales» vemos incluidas las provincias eclesiásticas y la región eclesiástica: ¿no son acaso, estas personas jurídicas, agrupaciones de Iglesias particulares? ¿Cabe entonces decir que son agrupaciones de fieles por razón de la adscripción necesaria de los fieles a un territorio? También nos encontramos con las diócesis personales, ¿mas estas no requerirían ser incluidas en una categoría distinta, a la que pudiéramos llamar «circunscripciones personales»? Por otra parte, se ha de tener en cuenta, respecto a las Prelaturas personales, que si bien pertenecer a ellas requiere en efecto expresa voluntad del fiel, sin embargo la existencia de la Prelatura no depende de esa voluntad, sino de la decisión de la Sede Apostólica, por tratarse de una estructura jerárquica. También encontramos en la tradición de la Iglesia la existencia repetida, en algunos lugares, de parroquias personales.

Por último, en cuanto a lo que se designa como «Patrimonios personificados», estima Bernárdez que el nuevo Código «ha enriquecido considerablemente» su normativa. «Sin embargo -añadirá-, es obvio que difícilmente puede configurarse un régimen jurídico general igualmente aplicable a figuras y entidades eclesiales tan distintas y diversas» (cfr. p. 190). El A. termina el Capítulo con la exposición sistemática y resumida de cómo se crean o constituyen estas personas jurídicas patrimoniales, cómo desarrollan

su actividad jurídica, cómo se modifican estructuralmente y cómo se extinguen (cfr. pp. 190-197).

7. El último Capítulo, bajo el ordinal XIII, se denomina «La Actividad jurídica» (pp. 193-203). Hace el A. una referencia a lo que «Lombardía denomina los momentos del derecho». Nos hallamos, pues, ante el dinamismo de la vida jurídica: «El ordenamiento jurídico no es una estructura estática», comienza diciendo Bernárdez (p. 193). En este contexto se da la distinción entre hechos y actos jurídicos. Destaca del acto jurídico, en primer lugar, esa presunción de validez declarada en el c. 124, 2 (cfr. p. 196). Estima que la denominación negocio jurídico, aunque la incorporan algunos autores, no ha obtenido carta de naturaleza en la doctrina canónica más generalizada; en cambio, «su definición habitual (...) puede aplicarse al acto jurídico en sentido estricto». Los actos jurídicos, que han encontrado un lugar específico para ellos en el Código, son aquellos «emanados de la voluntad de los fieles en cuanto miembros de la Iglesia o, como dice Molano, a los actos de autonomía privada» (cfr. p. 194). Así queda explicada para nosotros su inclusión sustantiva por el A. con independencia del Acto administrativo, a cuyo tratamiento se ha destinado el Capítulo IX; asimismo se comprende su situación en la sistemática del libro, tras el estudio de la persona física y de la persona jurídica, los respectivos sujetos a los que se atribuyen los derechos, sus titulares; los que pueden disponer de ellos si son derechos que están bajo ese poder de disposición; los sujetos que en definitiva pueden, gracias a la autonomía de la voluntad, llevar a cabo actos jurídicos eficaces.

En el apartado dedicado a clasificar los actos jurídicos considera el A. los vicios que los hacen inexistentes, nulos, anulables, y en general ineficaces; sin embargo, al exponer a continuación lo relativo a la presunción de validez (cfr. pp. 195-196), pensamos que hubiera podido ser este lugar como más indicado para el estudio del fenómeno contrario, el de su invalidez, o si se quiere -aunque este término tiene mayor amplitud- el de su ineficacia. Vuelve a considerar el tema al exponer los vicios de la voluntad (cfr. pp. 200-202). A nuestro parecer, se presenta fragmentariamente lo que quizá mereciera un tratamiento unitario.

A continuación, expondrá los elementos del acto jurídico, que son la capacidad, la voluntariedad (en lo que incluye la representación, el consejo y el consentimiento de otro, cfr. p. 198), el objeto y las causas; la forma (con especial referencia a la forma litúrgica en algunos actos). Junto a estos elementos, trata de los accidentales, cuales son los «añadidos por la voluntad del agente» y «limitan de algún modo la eficacia del acto jurídico. Son principalmente la condición, el término y el modo» (p. 199). El A. termina su obra considerando la incidencia del tiempo como factor determinante de importantes fenómenos jurídicos.

8. Una Introducción y Parte General del Derecho Canónico, aunque sistemáticamente queda situada como pórtico de la disciplina, requiere ser expuesta no por quien comienza su tarea universitaria de investigación y docencia, sino por quien después de recorrer un largo camino puede desde la superación de lo particular, con perspectiva y dominio del pasado, abarcar con facilidad todo el conjunto. Entonces se hace posible colocar en el ordenamiento canónico las diversas piezas que lo integran en su verdadero

sitio dentro del sistema. Es el momento también para descubrir los exactos perfiles de los fenómenos jurídicos, precisar los conceptos con que pueden ser definidos y destacar de modo relevante lo que merece ser presentado como de importancia principal. Esta es la hora para dejar hablar al maestro y seguirlo, como aquí hemos pretendido con la lectura y la reseña del profesor Bernárdez. Si, en estas consideraciones, se han mostrado alguna que otra discrepancia, debe siempre considerarse como un atrevido y leal disenso, en el que las des-sintonías manifestadas quedan acalladas, envueltas, por la admiración y por los asentimientos, mucho más numerosos y profundos en el propio convencimiento que en las objeciones. La obra, publicada a cargo de la Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, bien presentada, acredita a la entidad editora. El estudioso del Derecho Canónico encontrará en este libro una visión de conjunto, compendiada, de los temas generales del Derecho Canónico, tal como en la actualidad se contemplan y debaten. Además, ha de anotarse que la doctrina que se sienta queda expuesta siempre en un acertado contexto de fidelidad intelectual al magisterio de la Iglesia.

CARMELO DE DIEGO-LORA

HISTORIA DEL DERECHO CANONICO

Jean GAUDEMET, *L'Eglise dans l'empire romain (IV^e-V^e siècles)*, 1 vol. de XIII + 818 págs. correspondiente a *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident* publicada bajo la dirección de G. Le Bras, Ed. Sirey, Paris 1958, puesta al día en 1989.

Después de que Gabriel Le Bras publicara en 1955 su famoso *Prolegomena* de introducción a la entonces proyectada *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, como primer fruto maduro de ese ambicioso proyecto, publicó Jean Gaudemet, en 1958, su prestigioso volumen *L'Eglise dans l'empire romain (IV^e-V^e siècles)*, que se convirtió en la muestra evidente de la altura científica, que iba a lograr esa prestigiosa serie de estudios históricos.

Bajo la dirección del Prof. Gaudemet, ha ido engrosando sus volúmenes paulatinamente este prestigioso proyecto, aún inacabado, cuando ya ha sido agotada la primera edición del volumen que dio a conocer la serie. De ahí la necesidad imperiosa de esta nueva edición, que manteniendo la firme personalidad científica del trabajo anterior, presenta muestras claras de la juventud mental de su autor, siempre abierto a los trabajos realizados por otros investigadores.

Casi cien páginas, añadidas al texto anterior, son claro testimonio de la amplitud con que se hace eco el autor, en notas complementarias, de la bibliografía que, durante los últimos treinta años, ha ido completando nuevos aspectos de las realidades históricas presentadas por Gaudemet, cuando este período histórico no interesaba a la